

# MÉXICO EN CONTADORA: UNA BÚSQUEDA DE LÍMITES A SU COMPROMISO EN CENTROAMÉRICA

RENÉ HERRERA ZÚNIGA  
MANUEL CHAVARRÍA

EL DISCURSO POLÍTICO MEXICANO ALUSIVO al papel de México en la crisis centroamericana, expresado en las declaraciones oficiales tanto de la presidencia de la República y de la cancillería como de los demás organismos gubernamentales, y profusamente difundido por los medios de comunicación social, parecería expresar en 1984 una absoluta continuidad en los términos de la “centroamericanización” de la política exterior iniciada en 1979. Sin embargo, los esfuerzos mexicanos a fines de 1982 por crear un mecanismo de negociación multilateral para tratar la crisis centroamericana, cristalizados en enero de 1983 en el Grupo Contadora, representan por su contenido un cambio importante en la política mexicana hacia Centroamérica, en especial un cambio en la orientación que se venía dando a las relaciones con Nicaragua dentro del contexto de las relaciones globales con Centroamérica. Contadora representa, para México, el inicio de una marcha de retorno a los límites tradicionales de su política exterior, mismos que definen los márgenes del disenso mexicano frente a las políticas de Estados Unidos hacia América Latina.

De 1979 a 1981, México pudo aprovechar diversas circunstancias para rebasar tales límites,<sup>1</sup> pero debido al incremento de las tensiones ideológicas internacionales alrededor y en el interior del conflicto centroamericano, y a las dramáticas circunstancias de la crisis económica interna, México se fue inclinando ante la necesidad de replantear su política frente a los acontecimientos, en 1982. Sin embargo, la suma de compromisos adquiridos como parte de la estrategia adoptada en 1979, la urgencia de conservar posiciones fundamentales en pro de la autodeterminación y de la no intervención —dado el incremento de tensiones en la zona— y el hecho de que el Estado —a través del partido oficial (PRI) y de los medios de comunicación social bajo su control e influencia— había asumido la dirección de campañas locales de solidaridad con la democratización en Centroamérica, impusieron al gobierno del presidente Miguel de la Madrid severas restricciones para un cambio de política. La estrategia frente a la crisis aplicada por su gobierno en lo interno, no se reflejó de manera automática en la política exterior. La centroamericanización pareció más bien profundizarse con la creación del Grupo Contadora. Sin embargo,

<sup>1</sup> Véase René Herrera y Mario Ojeda, *La política de México hacia Centroamérica 1979-1982*, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, México, 1983.

por debajo de la retórica continuista, se advertían algunos signos de cambio en la estrategia mexicana hacia el conflicto.<sup>2</sup>

Ya en 1981 se había percibido que las dificultades de la política mexicana hacia Centroamérica no eran producidas sólo por la resistencia y la hostilidad de Estados Unidos. En buena medida, las posiciones de algunos países latinoamericanos involucrados en el conflicto, como Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, diferían de las de México, no tanto por cuestiones de alineación con Estados Unidos como por compromisos, alianzas partidarias y sentimientos derivados de intereses nacionales muy concretos afectados por las perturbaciones centroamericanas.<sup>3</sup>

Adicionalmente, y ello era previsible, los países centroamericanos —excluida Nicaragua— aprovecharon las diferencias entre los aliados originales del sandinismo para insertar sus propias demandas a países afectados por el conflicto, por encima de su alineación con Estados Unidos.<sup>4</sup> La falta de comprensión de esas posiciones había llevado a México a una situación de aislamiento, o al menos a un debilitamiento de su capacidad de presencia en la conflictiva situación centroamericana. Estados Unidos aprovechó también la situación para alentar el aislamiento mexicano.<sup>5</sup> Sin embargo, el gobierno norteamericano confiaba en que la sucesión presidencial en México, a fines de 1982, abriría nuevas perspectivas en las relaciones bilaterales sin que se produjeran rupturas importantes en las bases tradicionales del entendimiento mutuo. Estados Unidos confiaba en que la crisis económica mexicana forzaría al nuevo gobierno a ocuparse de aquellos temas de las relaciones internacionales vinculados con las prioridades nacionales: financiamiento externo, mercado

<sup>2</sup> Ya en octubre de 1982, ante el Comité de Asuntos Internacionales del PRI, el licenciado Miguel de la Madrid en calidad de presidente electo, dijo al referirse al papel de México frente al conflicto centroamericano:

“Considero que, para fortalecer sus posiciones, México debe asociar sus esfuerzos a los de otros países latinoamericanos. Así prepararemos el terreno de la negociación que muy probablemente asegure el buen éxito de nuestros objetivos”.

Miguel de la Madrid, *De la política exterior. México, América Latina y el Caribe*, Partido Revolucionario Institucional (PRI). Comisión de Asuntos Internacionales. Documento núm. 6, México, noviembre de 1982, p. 125.

<sup>3</sup> Hay que recordar que el plan de paz propuesto por el presidente López Portillo durante su visita a Nicaragua en febrero de 1982, había fracasado precisamente por la falta de aliados latinoamericanos en ese momento. No se borraban aún los efectos negativos del comunicado franco-mexicano sobre El Salvador.

<sup>4</sup> Esto se vio con mayor claridad cuando a raíz del nuevo acercamiento entre Venezuela y México —que dio lugar a la carta que sus presidentes enviaron en septiembre de 1982 a los gobiernos de Honduras y Nicaragua, Estados Unidos y Cuba— el presidente hondureño aceptó reunirse con el coordinador de la Junta Sandinista siempre y cuando la agenda fuese preparada por los ministros de relaciones exteriores de México, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y de los países importantes del Caribe. Esto encajaba en la línea del Foro Pro Paz de San José, creado como alternativa a la propuesta mexicano-venezolana. *The New York Times*, 12 de octubre de 1982, p. A4.

<sup>5</sup> Las presiones estadounidenses para obtener concesiones mexicanas en política exterior aprovechando las difíciles condiciones financieras de México, se volvieron evidentes en julio y agosto de 1982. Desde las elecciones en El Salvador, en mayo, el gobierno del presidente Reagan no ocultaba sus deseos de eliminar a México como intermediario en la región.

de energéticos, comercio exterior, etc. Esto ofrecería suficiente espacio y tiempo para articular una política norteamericana más sutil pero efectiva para presionar por un cambio en la posición mexicana en Centroamérica.

A los factores externos antes señalados, se aunaron algunas manifestaciones de grupos internos representativos de la empresa privada, partidos políticos y círculos de opinión pública mexicanos, que revelaban posturas críticas de la política gubernamental hacia Centroamérica. Y aun cuando en México la opinión pública no tiene mucho peso en la formulación de la política exterior, la crisis económica servía de pretexto para que algunos sectores se expresaran sobre aquélla.<sup>6</sup>

Había pues en 1982 elementos para que el nuevo presidente pudiera poner prudentemente ciertos límites conceptuales al compromiso contraído en Centroamérica, y buscar una completa reconciliación de las aspiraciones de paz en dicha región con las necesidades de afrontar con austeridad la crisis interna. La estrategia para atender esa reconciliación de intereses se centró en los esfuerzos de pacificación de la zona por la vía multilateral, más que por la de una diplomacia directa y abierta. Para todos los involucrados en la crisis, resultaba favorable la búsqueda de mecanismos de agrupamiento de intereses con paso previo a cualquier tipo de negociaciones. Se habían producido avances en ese sentido con las múltiples propuestas de paz presentadas durante 1982.<sup>7</sup>

Para México, Contadora representa así una afortunada opción en esa búsqueda de instancias diplomáticas de corte multilateral destinadas a restar fuerza a la intensa bilateralidad que había caracterizado a las relaciones con Nicaragua y repercutido sobre aquéllas con Estados Unidos y América Latina en su conjunto. En este sentido, Contadora es un mecanismo para reconocer los intereses nacionales —no coincidentes con los de México— de países involucrados en el conflicto y de los cuales México se había aislado: Venezuela, Colombia y Panamá. Ello significa que México aceptó que su política fuese puesta bajo un escrutinio más crítico en América Latina.

Si bien en México la opinión pública recibe poca o ninguna información sobre las posiciones reales de los países miembros de Contadora respecto al conflicto centroamericano, en especial respecto a Nicaragua, hay en el exte-

<sup>6</sup> De alguna manera, el disentimiento de algunos sectores de la política gubernamental influyó sobre las declaraciones de Miguel de la Madrid, quien señaló en la Comisión de Asuntos Internacionales del PRI:

“Seamos conscientes de que podremos mantener y ejecutar nuestra política exterior en la medida en que contemos con un consenso nacional amplio y suficientemente informado. Estamos ciertos de que las posiciones de nuestro gobierno y de nuestro Partido son las que reflejaban el interés nacional; pero estamos conscientes también de que en un país crecientemente denso, complejo, heterogéneo y plural, tenemos que hacer un esfuerzo de información a las grandes mayorías nacionales, a todo el país y apoyar de esta manera, políticamente, la política exterior de nuestro gobierno revolucionario”.

Miguel de la Madrid, *De la política exterior*, *op. cit.*, p. 126.

<sup>7</sup> Propuestas como las de México-Venezuela, la de Honduras en la OEA y Naciones Unidas, la del Foro Pro Paz y Democracia de Costa Rica, la de Nicaragua.

rior una mayor claridad informativa sobre las diferentes razones internas de esos países para afiliarse a una iniciativa de esa naturaleza.<sup>8</sup>

Contadora es también un mecanismo de reconocimiento —todavía limitado— de los intereses nacionales de los países centroamericanos envueltos en la crisis, cuya perspectiva es diferente de la mexicana: Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala; es decir, toda Centroamérica excepto Nicaragua. El diálogo promovido en Contadora permitió a México empezar a abandonar ciertas actitudes percibidas como prepotentes en algunos países del continente, sobre todo en los centroamericanos mismos. Dichas actitudes habían disminuido seriamente la capacidad de permanencia de México —en el mediano y largo plazos— en los asuntos centroamericanos, lo que ponía en peligro el interés particular, no declarado, de México en que Guatemala mantuviese el máximo de neutralidad frente al conflicto de los otros países centroamericanos.<sup>9</sup>

En otro nivel, Contadora ha resultado un mecanismo eficaz para encubrir los cambios en el manejo de las relaciones internacionales de México, especialmente a la luz de la crisis económica. Los grandes temas de esas relaciones internacionales —deuda externa, comercio exterior, mercado de energéticos— pasan a ser manejados por instancias gubernamentales distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las Secretarías de Hacienda, Programación y Presupuesto, Comercio, y otros organismos como Pemex y el Banco de México, plantean y gestionan directamente en el exterior los intereses nacionales. Así, la “centroamericanización” de la política exterior resulta funcional a la negociación discreta en esos grandes temas, al tiempo que por la vía de Contadora México inicia el retorno a los límites tradicionales de su disentimiento de las posiciones norteamericanas. Es claro que la funcionalidad de la centroamericanización tiene un límite temporal. De ahí que México esté forzando los ritmos de su presencia en Centroamérica vía Contadora y procurando un clímax en los esfuerzos de negociación. La firma de un documento de objetivos básicos en marzo de 1984 y el anuncio de un documento final en los últimos días de

<sup>8</sup> Véase el trabajo de Bruce Michael Bagley, “Regional Powers in the Caribbean Basin: Mexico, Venezuela, and Colombia”. Occasional Paper no. 2, Central American and Caribbean Program, School of Advanced International Studies. The Johns Hopkins University. Washington, D.C. January 1983.

<sup>9</sup> En sus referencias a la crisis de Centroamérica, México se cuidó de no hacer mención de las relaciones con Guatemala. Cuando era presidente electo, Miguel de la Madrid declaró: “Respecto de la frontera sur es preciso subrayar e insistir en dos cuestiones: en primer lugar [el respeto al derecho de asilo]; en segundo lugar, vigilaremos que desde nuestro territorio no se emprendan acciones políticas que afecten la estabilidad de los países centroamericanos. Con Guatemala queremos esforzarnos por recobrar y mantener una relación de amistad. . . Las relaciones con Guatemala deben ocupar una alta prioridad en nuestra política exterior”.

Miguel de la Madrid. *De la política exterior. México y sus vecinos: Estados Unidos, Guatemala y Belice*. Partido Revolucionario Institucional (PRI). Comisión de Asuntos Internacionales. Documento núm. 8, México, noviembre de 1982. Un análisis de la importancia de esas relaciones en la reciente formulación de la política de seguridad nacional mexicana, se encuentra en: Edward J. Williams. “The Mexican Military and Foreign Policies: The Evolution of Influence”. The Center for U.S. - Mexican Studies. University of California. San Diego, marzo de 1984.

abril del mismo año, previo a la firma de un tratado de paz y amistad, podrían dar a México la oportunidad de pasar a una política de presencia discreta en la región. Hay, sin embargo, algunas dificultades para que la presencia de México en Centroamérica alcance los límites que señala Contadora. Este Grupo expresa lo mejor de la capacidad negociadora de América Latina, pero no puede realmente imponer la paz o impedir la guerra, aunque esto sea reiteradamente presentado como el gran logro de Contadora. La posibilidad de paz en Centroamérica depende de la negociación entre las fuerzas político-militares que se enfrentan en los escenarios internos. La búsqueda de acuerdos de conciliación nacional daría sentido a una negociación global entre los Estados.

EL GRUPO CONTADORA: UNA CRONOLOGÍA ANOTADA.  
ENERO DE 1983 — ENERO DE 1984

*Enero de 1983*

Los ministros de relaciones exteriores de México, Venezuela, Colombia y Panamá se reúnen los días 8 y 9 en la isla de Contadora, en Panamá, para estudiar la situación centroamericana. Al final de la reunión, emiten lo que dio en llamarse “boletín informativo”, pero que en realidad es un comunicado conjunto en el que presentan un diagnóstico de las causas que dan lugar a la crisis centroamericana. También manifiestan en dicho documento que la crisis regional no se debe enmarcar en el contexto Este-Oeste, pues se le tiene que dar una solución desde adentro. La reunión es muy significativa desde varios puntos de vista. En primer término, marca el fin de la colaboración que había dado el gobierno de Venezuela a la política estadounidense en El Salvador desde 1980, misma que empezó a romperse a partir de las elecciones para la asamblea constituyente, en marzo de 1982, en las que el Partido Demócrata Cristiano no obtuvo una mayoría absoluta; en segundo lugar, se confirma el alejamiento de Colombia de la política proestadounidense seguida por el gobierno de Turbay Ayala; en tercero, fracasa el intento de mover a Panamá hacia un terreno más favorable a Estados Unidos con el retiro de Aristides Royo de la presidencia; finalmente, la reunión marca el inicio de la política exterior del gobierno del presidente mexicano, Miguel de la Madrid, quien tomó posesión de su cargo a principios de diciembre de 1982. Los gobiernos de estos países, aunque son diferentes, muestran un interés común por detener las posiciones de fuerza que Estados Unidos pretende ejercer en su calidad de potencia hegemónica en la región, y por encontrar una solución pacífica a las controversias existentes por la vía político-diplomática.

La posición de estos cuatro países recibe un fuerte respaldo en la quinta reunión extraordinaria del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), celebrada en Managua en la segunda semana de enero.

*Febrero de 1983*

Estados Unidos lleva a cabo una "ofensiva diplomática": Jeane Kirkpatrick realiza una gira por Centroamérica a instancias del presidente Reagan y Thomas Enders viaja a Europa para entrevistarse con Felipe González, Jefe de Gobierno español. También Antoine Blanca, embajador itinerante de Francia, emprende una gira por la región. El canciller costarricense, en un ambiente lleno de contratiempos, realiza una visita a México para discutir con su homólogo acerca de la pacificación de la zona.

*Marzo de 1983*

El Papa viaja por la región entre el 2 y el 15 del mes, con el propósito de buscar la unidad de la Iglesia Católica centroamericana y de hacer un llamado a restaurar la justicia para los pueblos del área. El viaje estuvo lleno de incidentes que aparentemente afectaron el mensaje de paz que trató de llevar Juan Pablo II a las poblaciones.

El gobierno de Ronald Reagan solicita al Congreso que la ayuda militar a El Salvador se aumente en 110 millones de dólares en 1983 y que forme parte de un paquete por 298 millones de dólares para Centroamérica en su conjunto.

*Abril de 1983*

En el marco de las gestiones de Contadora, el presidente de Colombia realiza los días 8, 9 y 10 una gira relámpago por la región y sostiene conversaciones con los presidentes Miguel de la Madrid, Luis Herrera Campins, Luis Alberto Monge y Ricardo de la Espriella. Los ministros de relaciones exteriores de los países del Grupo Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá) celebran una reunión urgente con el propósito de profundizar los acuerdos de Contadora suscritos en enero. Posteriormente a la reunión, los cuatro cancilleres realizan una gira breve por los países de la zona, como parte de sus gestiones de paz, al tiempo que organizan consultas con Fidel Castro y George Shultz.

El 20 y el 21 del mes, los cuatro cancilleres del Grupo Contadora celebran una reunión en Panamá con los ministros de relaciones exteriores de los cinco países centroamericanos. Sin embargo, el progreso alcanzado a principios de abril parece haberse detenido como resultado de la insistencia de Nicaragua en sostener conversaciones bilaterales con sus vecinos, en tanto que los cuatro países restantes desean que dichas conversaciones se lleven a cabo multilateralmente. En todo caso, los cancilleres del Grupo Contadora se reúnen, en lo individual, con sus homólogos centroamericanos. Hasta principios de 1983, Estados Unidos se había empeñado en excluir al gobierno de Managua de todos los foros regionales, pero ahora favorece las conversaciones multilaterales entre los cinco países que conforman la región, Nicaragua incluida, y los países del Grupo Contadora. Nicaragua se muestra renuente a tomar parte en las conversaciones multilaterales, donde sabe que tiene todas las de perder. El gobierno de Managua logró sostener conversaciones bilaterales positivas con el

gobierno de Costa Rica, a principios del mes de abril, para tratar los problemas fronterizos de manera amistosa a nivel de ministros de Estado.

Aparentemente, los esfuerzos de los cancilleres del Grupo Contadora se encaminan a buscar la forma de reconciliar las dos posiciones, con el propósito de poder abordar conjuntamente los problemas relativos al retiro de los asesores militares de toda Centroamérica, y de frenar de algún modo la carrera armamentista en la región.

En otro orden de cosas, Edén Pastora anuncia que ha decidido iniciar la lucha armada contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El comunicado de prensa se emite "desde las montañas de Nicaragua". Una conferencia de prensa convocada en México por otros dos líderes de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), Alfonso Robelo y Brooklyn Rivera, se cancela a raíz de que el gobierno de México los insta a salir del país.

El gobierno de Managua tiene serios problemas con los líderes guerrilleros salvadoreños pertenecientes a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). A principios del mes, Mélida Anaya Montes (comandante Ana María) es asesinada con saña por tres salvadoreños, uno de los cuales es miembro de la Comisión Política de las FPL y colaborador cercano del líder guerrillero Salvador Cayetano Carpio (comandante Marcial). Posteriormente, Carpio se suicida y el gobierno nicaragüense detiene a los tres salvadoreños acusados de estar involucrados en el asesinato de Mélida Anaya Montes. Los móviles del crimen parecen radicar en el hecho de que la víctima sostenía puntos de vista favorables a cohesionar más a las organizaciones guerrilleras integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, en consecuencia, a celebrar conversaciones de paz, en tanto que Carpio se mostró siempre renuente a ese tipo de procesos y accedió a ellos sólo por causa de muy fuertes presiones. Aparentemente, el miembro de las FPL arrestado confiesa que llevó a cabo el crimen por instrucciones del comandante Marcial, lo cual orilla a éste a quitarse la vida.

La Asamblea Nacional de Cuba manifiesta que apoya las gestiones de paz del Grupo Contadora; es su primera expresión oficial en este sentido.

### *Mayo de 1983*

El presidente de Brasil, João Baptista Figueiredo, visita México y discute ampliamente con Miguel de la Madrid sobre la crisis centroamericana y las negociaciones que está tratando de promover el Grupo Contadora. Al final de su viaje, el mandatario brasileño manifiesta su apoyo a las gestiones del Grupo, y suscribe así la tesis de que los conflictos en la región provienen de serios problemas económicos y sociales internos, no de la confrontación Este-Oeste. Esta clara posición de Brasil y de otras potencias medias (México, Venezuela y Colombia) constituye un factor poderoso para disuadir cualquier amenaza norteamericana de buscar una salida militar a la crisis centroamericana.

El líder de ARDE, Alfonso Robelo, después de celebrar conversaciones con Thomas Enders, Subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, y con Adolfo Calero Portocarrero, líder de las Fuerzas Democráticas Nicara-

güenses (FDN), manifiesta que su organización no cerrará filas con las FDN en su lucha contra el régimen sandinista porque ARDE tiene objetivos diferentes. Fundamentalmente, ARDE busca recanalizar la revolución, no que la Guardia Nacional de la época somocista retorne al poder, según manifestó Robelo.

Los conflictos fronterizos con Nicaragua a raíz de las incursiones militares de ARDE, que parten de Costa Rica y penetran en territorio nicaragüense, hacen que Costa Rica solicite a la OEA una fuerza de paz que patrulle su frontera con ese país. Anteriormente elevó una petición similar entre los países del Grupo Contadora, pero México manifestó que sólo podía apoyar el envío de un grupo de observadores no armados. Los gobiernos de los países miembros del Grupo Contadora envían un equipo de observadores de 12 hombres a San José, a fin de evaluar la situación militar en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Reagan califica a los miembros de dichas organizaciones rebeldes como "paladines de la libertad" (*freedom fighters*) y cuestiona la legitimidad del gobierno sandinista, al tiempo que la Cámara de Representantes norteamericana vota en contra de la ayuda que se proporciona a dichas fuerzas enemigas del gobierno nicaragüense.

A principios de mayo, Tomás Borge, Ministro del Interior nicaragüense, manifiesta que la ley de partidos políticos que sentará las bases para definir las reglas del proceso electoral, se aprobará antes de 1984. Expresa que dicha ley excluirá a todos los partidos somocistas, pero que cualquier otro partido político participante en las elecciones podrá asumir el poder.

Hacia fines del mes, entre el 27 y el 30, se celebra otra reunión de los cancilleres del Grupo Contadora con sus homólogos centroamericanos en la que se definen cuatro grandes áreas para orientar las discusiones en el seno de este foro, a saber: 1) el marco conceptual dentro del cual se van a dar; 2) los problemas políticos y de seguridad; 3) los objetivos económicos y sociales; y 4) los mecanismos para la ejecución y el control de los acuerdos logrados. Los cancilleres de Centroamérica y del Grupo Contadora conocen el informe de la comisión de observadores que visitó Costa Rica y Nicaragua a raíz de los incidentes fronterizos y acuerdan: 1) ratificar el mandato a la comisión en cuestión, la que continuará actuando como grupo asesor en lo relativo a la solución de los problemas fronterizos; 2) ofrecer a la comisión el apoyo que sea necesario; 3) otorgar pleno respaldo a la comisión bilateral mixta constituida por los dos países. En el transcurso de la reunión, los cancilleres centroamericanos presentan varias iniciativas con el propósito de crear condiciones formales para la convivencia regional. Con ese fin, los ministros de relaciones exteriores crean un grupo técnico, formado por representantes de los nueve países. Dicho grupo tendrá que recoger las diversas opiniones sobre los temas acordados, reunir la información pertinente en cada caso y proponer los procedimientos más aconsejables para abordar los problemas identificados.

*Junio de 1983*

Después de las agitaciones que trajo el mes de mayo para los cancilleres

del Grupo Contadora, junio fue de relativa tranquilidad pero no de reposo. En lo que se refiere a Estados Unidos, hay cambios importantes del personal encargado de formular y ejecutar la política hacia América Central. El Subsecretario de Estado, Thomas Enders, es destituido, y en su lugar nombran a Longhorne Motley, anteriormente embajador en Brasil. Al mismo tiempo, se retira a Deane Hinton de su puesto de embajador en El Salvador y se nombra a Thomas Pickering para sustituirle; en lugar de Wallace Nutting, jefe del Comando Sur, es designado el teniente general Paul Gorman. Los movimientos en la burocracia estadounidense antes mencionados son reflejo de las pugnas de poder que se han suscitado entre grupos de derecha en el gobierno, específicamente entre los "conservadores pragmáticos" y los "ideólogos de la derecha"; los últimos son capitaneados por el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, William Clark, y la embajadora ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick. Todo lo anterior fortalece la beligerancia en la política norteamericana de dos sentidos hacia Centroamérica: Estados Unidos brinda respaldo material y financiero al gobierno de El Salvador y a los grupos antisandinistas a la vez que persigue disminuir las tensiones por la vía diplomática.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua continúan deteriorándose aceleradamente con la expulsión de diplomáticos estadounidenses de Nicaragua, a lo que el gobierno norteamericano reacciona de inmediato cerrando seis consulados nicaragüenses y expulsando a 28 funcionarios. Los partidarios de una política dura hacia el área consolidan su posición de fuerza relativa al conocerse los planes del gobierno de Reagan de fundar una escuela de entrenamiento en suelo hondureño, y también a raíz de que el Secretario de Defensa aboga por un mayor número de asesores militares para el gobierno salvadoreño.

Al sombrío panorama que auguró la rotación de funcionarios en la burocracia norteamericana, se suman otros elementos negativos en el ámbito regional. En tanto que Nicaragua sigue insistiendo en que las conversaciones para buscar la paz en la región deben celebrarse sobre una base bilateral, los demás países sostienen que conviene llevar a cabo un diálogo multilateral. Por otra parte, los países centroamericanos, junto con los cuatro del Grupo Contadora, muestran dudas en cuanto al foro apropiado para tratar los problemas de América Central. Nicaragua, probablemente como consecuencia de sus fricciones y diferencias con Venezuela y Colombia, trata de llevar su caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A ello se oponen Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y los dos países mencionados, quienes insisten en recurrir a las instancias regionales y subregionales. Como si ello no bastara, Honduras propone con vehemencia que se ponga en práctica su plan de paz, rechazado en todos sus puntos por Nicaragua. Lo anterior es muy sintomático de la falta de confianza que han manifestado los países latinoamericanos frente al intento de solucionar sus problemas a través de la Organización de Estados Americanos, cuya total inoperatividad se puso plenamente en evidencia en la primavera de 1982, durante el conflicto entre Argentina e Inglaterra en torno a las islas Malvinas. A su vez, la Organización de Estados Centroamericanos tiene ya más de cuatro lustros de ser un mecanismo regional que sirve casi sólo a fines protocolarios y de orden legal. Bajo esas circunstancias,

la única instancia —informal, por cierto— a la que se puede recurrir es el Grupo Contadora, a pesar de las suspicacias.

Vistas las cosas desde otro ángulo, el mes de junio permite una mayor consolidación de las posiciones de los países del Grupo Contadora al darse cita los cancilleres, en Cartagena, para celebrar el sesquicentenario de la fundación de esta ciudad colombiana, reunión a la que concurren representantes de 18 países americanos —entre ellos los centroamericanos— así como el Jefe de Gobierno de España, Felipe González. La mayoría de las representaciones dan un fuerte respaldo al Grupo. A estas alturas, resulta claro que Contadora se perfila como una tercera vía frente a las dos que emergen del gobierno estadounidense: la intervención militar directa pregonada por los círculos más belicistas (*hawks*, halcones), y las negociaciones. Sus partidarios respectivos están en pugna, aunque por ahora predomina la corriente de ayuda militar; la posición conciliante del Departamento de Estado ha sido débil.

El Grupo Contadora recibe también el apoyo del presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana y de los vicepresidentes latinoamericanos de la Internacional Socialista (IS), organizaciones ambas vinculadas estrechamente con partidos políticos centroamericanos y que están en condiciones de influir de alguna manera sobre los actores políticos. Es importante observar que los vicepresidentes de la IS, en una declaración al final de su reunión a mediados de junio en México, dejan traslucir varias cosas que no eran del conocimiento público: en primer lugar, que los miembros de la IS estaban llevando a cabo gestiones para asegurar que Nicaragua diera muestras más palpables de su interés por moverse hacia el pluralismo político y asegurar de esta manera un proceso de democratización; en segundo lugar, que el Grupo Contadora mostraba limitaciones serias para abordar el problema de la crisis salvadoreña. En otros términos, los vicepresidentes de la IS dejan entrever que el gobierno sandinista no se muestra muy dispuesto a adoptar por sí mismo medidas específicas en términos de un estatuto de partidos políticos, otro electoral y uno más que “regule y garantice la libertad de expresión en Nicaragua”, los cuales habían sido anunciados para 1983. Es todavía más interesante el que los vicepresidentes parezcan sugerir que la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) interponga sus buenos oficios para promover conversaciones entre el gobierno salvadoreño y la coalición opositora FMLN-FDR, dadas las limitaciones del Grupo Contadora.

Finalmente, la propuesta de paz que el FMLN-FDR remite al embajador especial norteamericano para Centroamérica, Richard Stone, y que después hace del conocimiento público, no obtiene respuesta de la Comisión de Paz del gobierno salvadoreño, que tiene demasiadas limitaciones legales para desempeñar el papel de un interlocutor. La propuesta es sencilla y consiste básicamente en cinco puntos, que son los siguientes: 1) recobrar la soberanía nacional y lograr una solución justa que permita superar el estado de guerra actual, garantizando a todos los salvadoreños una sociedad independiente, justa y democrática, y al pueblo centroamericano una coexistencia pacífica; 2) con ese propósito, buscar y promover el diálogo directo, en un ambiente que permita la discusión exhaustiva de los problemas que enfrenta la sociedad salva-

doreña, en el que puedan participar todos los sectores interesados en la búsqueda de la paz y la justicia; 3) las partes del conflicto son los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, por una parte, y el FDR-FMLN, por la otra; 4) para que se pueda lograr una solución política, es necesario que esté presente la alianza de fuerzas democráticas y revolucionarias representadas por el FDR-FMLN; y 5) es necesario que haya terceras partes que puedan ofrecer sus buenos oficios y sirvan de testigos durante la negociación.

*Julio de 1983*

El mes de julio se puede considerar como uno de los momentos políticos más trascendentes para Centroamérica, ya que se celebra otra reunión de cancilleres del Grupo Contadora y se lleva a cabo una reunión de presidentes del Grupo.

El proceso de cooperación en materia de política exterior iniciado en enero, recibe la bendición del nivel político más alto con la reunión de los presidentes de los cuatro países miembros de Contadora —Belisario Betancur, de Colombia; Miguel de la Madrid, de México; Ricardo de la Espriella, de Panamá; y Luis Herrera Campins, de Venezuela— celebrada a mediados de julio en Cancún, México. Al parecer, los gobiernos de estos países concluyen, a la luz de la dinámica de los hechos, que la posibilidad de una intervención armada en la región no es tan remota, razón por la cual deciden tratar de armonizar más sus proyectos nacionales de gobierno en lo que se refiere a política exterior. Los presidentes reunidos dan a entender al mundo, y a Estados Unidos en particular, su preocupación por la crisis que se observa en Centroamérica y su interés por encontrarle una solución política negociada, a fin de no incurrir en los costos que conlleva la regionalización de los conflictos. También hacen saber a los gobiernos de los países centroamericanos que sus intenciones como grupo obedecen al hecho de que los conflictos en el área pueden incidir negativamente sobre cada Estado y sobre el subcontinente en general. Con esta reunión cumbre, los países del grupo tratan, asimismo, de conjurar suspicacias en torno a la naturaleza de sus gestiones.

El propósito medular de la reunión es fijar los lineamientos políticos generales para que los cancilleres elaboren un programa que puedan presentar luego a los países del área; se trata pues de preparar el terreno para llegar a acuerdos y compromisos políticos en lo siguiente: *a)* control de la carrera armamentista; *b)* eliminación de los asesores extranjeros; *c)* creación de zonas desmilitarizadas; *d)* proscripción del uso del territorio de un país para desarrollar acciones políticas o militares con el objeto de desestabilizar a otros Estados; *e)* eliminación del trasiego y tráfico de armas; y *f)* prohibición de otras formas de agresión o injerencia en los asuntos internos de cualquiera de los países del área. Además de enumerar los posibles compromisos a los que pueden llegar los países, la Declaración de Cancún reitera que las medidas que se ponga en práctica para aminorar las tensiones que privan en la región, deberían ir acompañadas de esfuerzos internos para promover la democratización de aque-

llos países que no tienen gobiernos representativos, o para fortalecer las instituciones democráticas en los países que sí los tienen, al tiempo que se garantiza el respeto a los derechos humanos. Por otra parte, a fin de darle un contenido material a dichos procesos, los países deben hacer esfuerzos concretos con el objeto de fomentar el desarrollo económico y procurar que los logros que se alcancen en dicha materia se distribuyan de una manera más justa que en el pasado. Los países de Contadora manifiestan de ese modo su interés no sólo en que se pacifique la región, sino en que la paz por conseguirse resulte orgánica y duradera.

A la luz del contenido de la Declaración que formularon los presidentes, se observa que el grueso de las acciones de sus gobiernos van a encaminarse a lograr una paz en Nicaragua, ya que no es posible llevar a cabo acciones específicas en el caso de El Salvador sin violentar, en cierto modo, alguno de los principios pregonados con intensidad y vehemencia por dichos gobiernos: respeto a la autodeterminación de los pueblos, no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, igualdad soberana de los Estados. Por otra parte, los países en cuestión todavía no tienen bien definida su política exterior respecto al área, de manera que les es difícil predecir el alcance de lo que se logra en ese momento.

Conscientes de sus limitaciones y de que el conflicto Este-Oeste sirve de trasfondo al conflicto interno de Nicaragua, los mandatarios de El Salvador y Guatemala redactan y envían misivas a Ronald Reagan y a Fidel Castro Ruz invitándolos a respaldar el documento antes mencionado.

Managua fue la primera en reaccionar a la Declaración de Cancún. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) acepta "que sea de carácter multilateral el inicio del proceso de negociaciones propiciadas por el Grupo Contadora. . .", dando así muestras de una mayor flexibilidad, a la vez que aprovecha la celebración del cuarto aniversario del triunfo de la revolución sandinista (19 de julio) para formular su propia propuesta de paz. Este plan consiste en seis puntos: 1) firma de un acuerdo de no agresión entre Nicaragua y Honduras; 2) cese absoluto del suministro de armas a las fuerzas beligerantes de El Salvador; 3) cese del apoyo militar y del uso de cualquier territorio para lanzar agresiones contra cualquier gobierno del área; 4) compromiso de respetar la autodeterminación de los pueblos centroamericanos y la no interferencia en los asuntos internos de cada país; 5) cese de las agresiones y de la discriminación económica contra cualquier país de América Central; 6) no instalación de bases militares extranjeras en territorio de Centroamérica, y suspensión de maniobras militares en la zona con la participación de ejércitos extranjeros. En realidad, todos los puntos coinciden de alguna manera con lo planteado por los presidentes de Contadora, sin agregar ningún elemento nuevo. La verdad es que no deja de sentirse cierta preocupación y angustia en el discurso pronunciado por Daniel Ortega el 19 de julio: revela un ansia por ampliar las bases políticas de su gobierno —lo que se procura mediante una moratoria a las deudas de los pequeños y medianos campesinos— y admite que las medidas de bloqueo económico de Estados Unidos están afectando seriamente a Nicaragua; por otro lado, el discurso deja entrever que

una parte significativa de la preocupación de Ortega se debe a la situación militar, ya que anuncia la ley del servicio militar patriótico y los planes de armar aún más al país, lo cual contrarresta la aparente flexibilidad antes mencionada.

La segunda reacción importante vino de La Habana, el día 20, a través de una misiva de Fidel Castro dirigida a los cuatro presidentes de Contadora en la que les manifiesta que pueden contar con Cuba “para las soluciones negociadas que se basen en los principios de no intervención, autodeterminación, igualdad soberana de los Estados, la cooperación para el desarrollo económico y social, la solución pacífica de las controversias y que deben ser la expresión libre y auténtica de la voluntad popular”. Aprueba de manera especial la anuencia de Nicaragua a celebrar conversaciones multilaterales con el ánimo de buscar una solución a los problemas centroamericanos y da su respaldo pleno a las gestiones del Grupo.

Los cancilleres de Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador se reúnen para acordar una plataforma común para la siguiente reunión del Grupo Contadora, en torno a las cuatro áreas prioritarias para superar la crisis: el marco conceptual, los problemas políticos y de seguridad, los económicos y sociales y, por último, la ejecución y control de los acuerdos que se adopte.

En síntesis, todas las partes excepto Estados Unidos se avienen a aceptar al Grupo Contadora como foro apropiado para discutir los problemas de la región y tratar de encontrarles una solución. El grupo recibe, en el curso de la celebración del segundo centenario del natalicio de Simón Bolívar, el respaldo de los seis presidentes de los países bolivarianos.

A fin de destacar la seriedad de las gestiones del Grupo, el día 27 los presidentes de Panamá y Colombia visitan a los mandatarios centroamericanos con el objeto de hacer consultas “en torno a un consenso buscado por los presidentes visitantes para emitir una declaración conjunta”.

Por lo que se refiere a Estados Unidos y su reacción al Grupo Contadora, la respuesta que Reagan da a la misiva que le enviaron los cuatro presidentes a mediados de julio, a raíz de la reunión cumbre de Cancún, es bastante desalentadora en un ambiente poco constructivo. En una carta entregada el 26 de julio, el mandatario estadounidense deja ver que en su opinión el foro adecuado para tratar los problemas de la región es la OEA, y que va a realizar sus esfuerzos de paz a través de un emisario especial para Centroamérica y de la comisión bipartidista encabezada por Henry Kissinger, lo que no implica un acercamiento deliberado o específico al Grupo Contadora. Asimismo, al mencionar los cuatro principios básicos de la política de Estados Unidos hacia América Central,<sup>10</sup> Reagan parece sugerir que no tiene confianza en que el Grupo Contadora aborde esos problemas con la seriedad y el vigor que merecen, aun cuando diga que se siente “complacido con que la Declaración de Can-

<sup>10</sup> Establecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas; respeto al principio de no intervención; eliminación del conflicto centroamericano del contexto Este-Oeste; y, por último, cooperación entre los países del istmo para lograr y sostener un nivel de crecimiento económico que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de sus pueblos.

cún reconozca la importancia de estos principios fundamentales". El contexto en el cual se da la carta del presidente Reagan, es justo el momento en que decide desplegar su bandera frente a las costas de Nicaragua en barcos de su flota de guerra, y hacer efectivo un anexo al convenio militar que tiene con Honduras<sup>11</sup> mediante la construcción de una importante base militar en Puerto Castilla. La ambivalencia de la política exterior de Estados Unidos, expresada en la coexistencia de un mecanismo de presión militar con otro de ofertas políticas, alcanza así un punto máximo, ya que en esos días se está promoviendo también el primer contacto entre el embajador especial norteamericano, Richard Stone, y los representantes del FMLN-FDR en Costa Rica, aunque la reunión no se concreta sino después.

### *Agosto de 1983*

En Guatemala, se produce un golpe de Estado el 8 de agosto, que derroca al general Ríos Montt y lleva al Ministro de la Defensa, general Mejía Víctores, a la jefatura del Estado. El golpe ocurre 48 horas después de haberse celebrado una reunión de los ministros de defensa de Honduras, El Salvador y Guatemala con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Gorman, a bordo del portaaviones "Ranger" apostado en las costas del Pacífico de América Central. Durante su gestión, el general Ríos Montt había mantenido a Guatemala a una distancia prudente de sus vecinos del sur.

En Estados Unidos, la política del presidente Reagan hacia la región, específicamente hacia Nicaragua, enfrenta obstáculos en el Congreso, ya que algunos de sus miembros se oponen a que el gobierno financie operaciones encubiertas con el propósito de desestabilizar o derrocar al gobierno de un país con el que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas.

El día 14, en La Paz, Baja California Sur, se entrevistan los presidentes de México y Estados Unidos. En la reunión, el mandatario mexicano expuso las razones que tiene México para interesarse en los problemas centroamericanos. El presidente de Estados Unidos, por su parte, se limitó a señalar que su país tiene diferencias con México en lo relativo a América Central y que la política exterior norteamericana hacia dicha área obedece a los cuatro principios señalados en la misiva de fines del mes anterior.

El 25 de agosto se celebra una reunión de la Comisión Técnica del Grupo Contadora, integrada por los vicescancilleres, con el propósito de examinar "las actuales circunstancias, los cambios que se produjeron recientemente en el área y [revisar] propuestas". Se trata, pues, de ir sentando las bases para una negociación entre Honduras y Nicaragua, fundamentalmente, ya que con Costa Rica las dificultades parecen tener arreglo desde un enfoque bilateral. Al mismo tiempo, los temores a raíz del cambio de gobierno en Guatemala se han ido disipando con la actitud constructiva del canciller guatemalteco en sus gi-

<sup>11</sup> Convenio firmado el 20 de mayo de 1954, que sirvió para respaldar la invasión de Guatemala patrocinada por la CIA con el propósito de derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. El anexo se refiere a ayuda militar al gobierno hondureño y se firma el 7 de mayo de 1982.

ras por la región. Guatemala conserva una discreta neutralidad frente al conflicto centroamericano.

El gobierno del presidente Reagan continúa agravando las tensiones en la región al manifestar que el ofrecimiento de Fidel Castro a los presidentes de Contadora es poco serio. Sin embargo, el embajador Stone realiza una visita a Nicaragua y anuncia una segunda ronda de conversaciones con los representantes de la coalición salvadoreña opositora, FMLN-FDR.

En una extensa entrevista de prensa con periodistas norteamericanos,<sup>12</sup> Fidel Castro deja entrever parte de los intereses cubanos en la región y da sus apreciaciones sobre la problemática centroamericana. En ese sentido, insiste nuevamente en que “no se podría lograr una solución política negociada en Centroamérica, si no se logra una solución política negociada en El Salvador”, punto que califica de clave; es más, señala que “no se puede lograr soluciones sacrificando a alguien”, dando a entender que Cuba se opondría a cualquier entendimiento que articulara a los rebeldes salvadoreños como objeto de negociación, lo cual se especuló en algunos momentos en ciertos círculos. Castro declara estar de acuerdo con el retiro de los asesores extranjeros, siempre y cuando no sea unilateral y el país que recibe la colaboración dé su aquiescencia. También expresa estar de acuerdo con el cese del envío de armas a la zona, a condición de que exista acuerdo entre las partes. A lo largo de la entrevista, se percibe un interés marcado en buscar una solución negociada a la crisis.

El 3 de agosto se renueva el Acuerdo de San José, en los términos acordados el 18 de julio entre el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal de México y el Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, a saber: a) mantener el compromiso de abastecer al área con hasta 160 000 barriles diarios aportados por partes iguales; b) otorgar créditos hasta por el equivalente de 20 % de las facturas a un plazo de cinco años y con una tasa de interés del 8 % anual; c) en caso de que esos recursos se destinen a proyectos de desarrollo económico, en especial los del sector energético y los relativos a la integración económica regional, los financiamientos podrán alargarse a un plazo de 20 años con una tasa de interés del 6 % anual. Los términos del pacto, aunque ligeramente distintos, siguen siendo sumamente generosos hacia la región. Sin embargo, se sabe por canales indirectos que Venezuela ha suspendido los envíos de crudo a Managua como consecuencia de la falta de pago, a la vez que en México se empiezan a filtrar noticias de que también el gobierno mexicano padece la morosidad de Nicaragua. Costa Rica, por su parte, a fines del mes renegocia la deuda externa por 30 millones de dólares que tiene pendiente con México.

### *Septiembre de 1983*

El 4 de septiembre, el presidente de México expresa que es menester que Cuba participe en el esfuerzo de buscarle una solución política negociada a

<sup>12</sup> Publicada en *Bohemia*, Año 75, núm. 32, La Habana, Cuba, 12 de agosto de 1983.

la crisis centroamericana. Manifiesta que se ha avanzado lentamente, pero que se ha logrado "que las partes involucradas en el conflicto dialoguen entre sí".

El embajador Stone celebra una segunda ronda de conversaciones con los salvadoreños de la coalición FMLN-FDR, con el patrocinio de Luis Alberto Monge, de Costa Rica. El 30 de agosto, en Bogotá, bajo los auspicios del presidente Belisario Betancur, dos dirigentes de la coalición opositora salvadoreña sostuvieron un primer diálogo con los miembros de la Comisión de Paz del gobierno salvadoreño. Los resultados no fueron aparentemente halagüeños. Las fuerzas opositoras manifiestan a la prensa: "Estamos ganando la guerra con respaldo popular y la desmoralización de las fuerzas armadas. . . No creemos que un pacto pueda beneficiarnos en este momento". Los miembros de la representación gubernamental fueron más cautos, manifestando optimismo en relación al futuro de esas conversaciones, aunque "no se han encontrado aún fórmulas precisas para continuar o hacer más formal el diálogo".

En Panamá, Ricardo de la Espriella acepta la renuncia de seis ministros de Estado, entre ellos el de Relaciones Exteriores, Juan José Amado. En su lugar nombra a Oyden Ortega, que fue Ministro del Trabajo durante los gobiernos del general Omar Torrijos y negociador de los tratados Torrijos-Carter sobre el canal.

El Secretario de la Defensa estadounidense, Caspar Weinberger, visita Centroamérica. Por su parte, el Secretario de Estado Adjunto, Longhorne Mottley, tenía planeado viajar a Managua a invitación de la Junta de Gobierno de Nicaragua, pero cancela su visita cuando le anuncian que lo recibiría el vicescanciller nicaragüense y no los miembros de la Junta.

El presidente de México, en declaraciones a *El País* de Madrid, dice que Cuba debe participar en el esfuerzo de paz en Centroamérica incorporándose al "diálogo de los países americanos", ya que de esa manera "se lograría una solución negociada y diplomática para evitar una guerra regional". En esos días se anuncia que México otorga a Cuba una línea de crédito por 55 millones de dólares para financiar la compra de productos mexicanos. De hecho, con ello se resuelve el problema de crédito arrastrado de antaño; por fin Cuba da a entender que reconoce la deuda con México. Fidel Castro califica el hecho de "una muestra más de las fructíferas relaciones que existen entre los dos países".

El presidente de México recibe al embajador especial de Estados Unidos para Centroamérica, Richard Stone, a quien manifiesta su esperanza de que en la próxima reunión de Contadora pueda surgir una plataforma básica sobre la que se estructuren los compromisos fundamentales de paz y cooperación en el área, como un camino firme hacia la solución de la crisis regional.

El día 7 da principio una reunión de los cuatro cancilleres del Grupo Contadora con sus homólogos centroamericanos, con el propósito de tratar de delinear las bases y fijar los compromisos sobre los cuales se pueda suscribir convenios. El día 9 se anuncia que los cancilleres centroamericanos llegaron a un acuerdo "para lograr la distensión en el área y alcanzar la paz en la región". Ello se plasma en las *Bases para la paz en Centroamérica*, que no se hacen del conocimiento público. En un boletín emitido por el Grupo, se dice que tal docu-

mento de objetivos “recoge diversos criterios, identifica coincidencias y consagra compromisos fundamentales para establecer la paz, la democracia, la seguridad, la estabilidad y la cooperación para el desarrollo económico y social en la región centroamericana”.

Los puntos del documento pueden agruparse en cinco categorías: 1) aquellos que se refieren a las relaciones existentes entre los Estados; 2) los que se refieren a la paz y a la estabilidad internas, 3) los puntos relativos a la seguridad nacional de los Estados, 4) uno que aborda el problema de los refugiados, y 5) los relativos a la cooperación entre los Estados para su desarrollo económico y social. El más amplio de todos es el que toca los problemas de seguridad nacional, pues abarca cuestiones de soberanía e integridad de los Estados, la carrera armamentista y sus dimensiones, la prohibición de bases militares extranjeras, los asesores militares extranjeros, el control del tráfico de armas y su eliminación, la urgencia de impedir que se use el territorio de un Estado para desestabilizar a los gobiernos de los países vecinos, la abstención de apoyar o fomentar actos terroristas, subversivos o de sabotaje y, por último, la necesidad de establecer mecanismos y sistemas de comunicación para evitar o resolver incidentes entre los Estados.

El otro capítulo importante es el de la cooperación para el desarrollo económico y social, que engloba cuestiones relativas a programas de desarrollo económico y social que eleven el bienestar de las poblaciones y promuevan una mejor distribución de la riqueza; a la reactivación y al fortalecimiento de los mecanismos de integración económica; a la búsqueda de recursos monetarios externos para financiar la reactivación del comercio intrarregional y los déficit en las balanzas de pagos; a la formulación y puesta en marcha de una política comercial hacia terceros países que promueva el comercio exterior; y, finalmente, a la asistencia y cooperación externas en materia de programas y proyectos de inversión y comercialización.

El canciller mexicano manifiesta, en ocasión de una visita oficial a Venezuela, que el próximo paso del Grupo Contadora es buscar la adopción de los instrumentos jurídicos pertinentes y la formulación de sistemas de verificación y control.

En medio de tensiones y diferencias, representantes de los cinco países centroamericanos, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comunidad Económica Europea (CEE), se dan tiempo para ir a Bruselas a hacer una presentación sobre la importancia de la asistencia externa para el desarrollo de sus economías nacionales y de la región en su conjunto, especialmente en lo relativo al comercio intrazonal. Lo único concreto que emerge de esta gestión es que los gobiernos centroamericanos encargan al BID coordinar las gestiones orientadas a integrar un grupo de cooperación para el desarrollo económico y social del istmo. Es a partir de esta indicación y por sugerencia de México que en el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) se conforma un comité de acción de apoyo a Centroamérica, el cual se formalizará más adelante con el nombre de Comité de Apoyo para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica, CADESCA, o “Contadora económica”. Hacia fines del mes, la CEE hace saber a los países del Grupo Contadora su inte-

rés de brindar asistencia financiera a América Central bajo ciertas condiciones que garanticen estabilidad en el área.

A fin de asegurar que lo acordado en la reunión de presidentes de Contadora en julio y el documento de objetivos aprobado por los cancilleres en la segunda semana de septiembre —en el que cristaliza la declaración de Cancún— no sean letra muerta, los presidentes del Grupo hacen un llamado a sus homólogos centroamericanos para que se pronuncien por lo mismo. Los mensajes son entregados a los mandatarios del istmo por Oyden Ortega, quien hace su presentación como nuevo canciller panameño. Nicaragua lleva el problema de las tensiones con los países vecinos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ante la oposición de los gobiernos de otros países —los de América Central y los de Contadora— se acuerda mantener el problema en el ámbito del Grupo Contadora, después de graves y agitadas discusiones.

En Panamá, se producen cambios en la Guardia Nacional. El general de brigada Manuel Antonio Noriega, jefe de la Guardia Nacional, anuncia más de 30 cambios y traslados entre los coroneles y capitanes, con lo cual asegura la profesionalidad de las fuerzas armadas y afirma que el cuerpo permanecerá al margen de la candidatura presidencial promovida por el comandante en jefe anterior, general Rubén Darío Paredes.

#### *Octubre de 1983*

Las pláticas de la Comisión de Paz del gobierno salvadoreño con la coalición opositora FDR-FMLN, quedan rotas a partir de una reunión celebrada a fines de septiembre en Bogotá bajo el patrocinio del presidente Betancur. La Comisión de Paz le propone a la coalición que participe en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República programadas para 1984. Los rebeldes presentan a los miembros de la Comisión cuatro textos que expresan las razones para no aceptar la invitación.

Los vientos de guerra siguen soplando con fuerza a lo largo de Centroamérica y el Caribe. El día 25 tiene lugar la invasión norteamericana de la isla caribeña de Granada. El mensaje que perciben El Salvador y Nicaragua es que Estados Unidos seguiría el mismo curso de acción en caso de que la guerrilla salvadoreña ganara terreno con demasiada rapidez y de que los sandinistas no se avinieran seriamente a brindar espacio político a las distintas facciones opositoras. La acción de Estados Unidos coincide con el hecho de que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están promoviendo en mayor o menor grado la reactivación del Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA), creado en los años sesenta en reacción al surgir de grupos guerrilleros en Guatemala y Nicaragua.

En una comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, insiste en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto. Subraya también la necesidad de sacar a Centroamérica de la confrontación Este-Oeste y de excluir cualquier pretensión hegemónica. Además, como prueba de que es viable buscar soluciones negociadas a los conflictos regionales, Sepúlveda Amor hace público el docu-

mento de objetivos —con el consentimiento de los otros cancilleres del Grupo— ai entregárselo al Secretario General del organismo mencionado. Sin embargo, la prueba de que los países no perciben a tiempo el mensaje indirecto de Reagan en el sentido de que se reserva el derecho a invadir un país si considera en peligro la seguridad de Estados Unidos, radica en el hecho de que el Comité Técnico y los cancilleres de Contadora, reunidos entre el 20 y el 23 de octubre, no dejan entrever en el comunicado que emiten una preocupación específica por el clima de invasión que ya se notaba en el Caribe. El hecho de que el Comité Técnico y los cancilleres se reúnan en la tercera semana de octubre, a pesar de que habían celebrado la reunión anterior en la segunda semana de septiembre, denota la lentitud en el progreso de las gestiones de Contadora, lentitud que las seguirá caracterizando aun después de la invasión de Granada. Ello muestra que hay cierta rigidez en la forma de abordar los problemas: los enfoques tienden a centrarse básicamente en los elementos que podrían considerarse estructurales, pero descuidan aquellos otros que determinan la forma y el ritmo de la crisis centroamericana.

Las preocupaciones ante la escalada militar llevan a los sandinistas a un esfuerzo por consolidar y ampliar sus bases políticas, especialmente en las zonas afectadas por los contrarrevolucionarios, mediante la puesta en marcha de significativos programas de reforma agraria. Asimismo, desde otro ángulo, buscan disminuir las tensiones que enfrenta Nicaragua a través de una propuesta específica que presentan al gobierno estadounidense. La propuesta incluye proyectos de tratados entre Nicaragua y Estados Unidos, Nicaragua y Honduras; un tratado de paz y seguridad entre los cinco países centroamericanos; y un acuerdo para coadyuvar a la solución del conflicto armado en El Salvador. En términos generales, la propuesta refleja la forma en que los sandinistas perciben no sólo sus problemas sino los de sus vecinos y los de la región como un todo. Se puede pensar, como después lo manifestó el presidente Reagan, que la propuesta no es seria porque parte de la hipótesis de que todos los males que asolan a Nicaragua son producto de las maquinaciones de Estados Unidos con la ayuda de Honduras, sin reconocer un solo error del gobierno sandinista ni considerar la multitud de elementos que determinan el estado de cosas en Centroamérica. Se trata, pues, de proyectos de tratados y acuerdos<sup>13</sup> que no conllevan una seria decisión política de buscar interlocutores, cuyos propósitos son más bien de naturaleza publicitaria —razón para hacerlos del conocimiento público a fines de noviembre.

La ambivalencia de la política exterior de Nicaragua se manifiesta nuevamente a raíz de las visitas de Longhorne Motley y Henry Kissinger a Nicaragua, ya que ante ellos la Junta de Gobierno esgrimió una retórica extremadamente fuerte, a tal grado que en algún momento Kissinger dio por terminado lo que posteriormente calificó de sermón. De esa manera, se advierte que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional no tiene en el fondo un interés

<sup>13</sup> Se dieron a conocer con el título de "Bases jurídicas para garantizar la paz y la seguridad internacionales de los Estados de América Central", *El Día*, México, D.F., 30 de noviembre y 1º de diciembre de 1983.

real por discutir la crisis nicaragüense con el gobierno de Estados Unidos. La Junta rechaza a los posibles interlocutores y se cierra ella misma espacios políticos, ya que los miembros de la comisión bipartidista encabezada por el ex Secretario de Estado norteamericano provenían de distintos sectores políticos y económicos.

*Noviembre de 1983*

El Grupo Contadora sigue haciendo esfuerzos por acelerar el paso y llegar a pactos que tengan efectos positivos en la búsqueda de la paz en el área. A pesar de los signos ominosos que trajo la invasión de Granada, el Grupo se hace oír desde mediados de noviembre, cuando en el XIII período ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos presenta oficialmente a la Asamblea General un informe detallado de las gestiones que ha realizado, y anuncia que tiene listos los borradores de tratados que harán obligatorios los compromisos que se desprenden del documento de objetivos. De esa forma muestra su preocupación ante la actitud belicista de Estados Unidos, sobre todo después de que el Subsecretario de Estado, Kenneth Dam, manifiesta la posición norteamericana hacia Centroamérica en la misma reunión de la OEA. El canciller mexicano, en su discurso ante dicho organismo, señala que “la negociación diplomática debe acelerar su paso para dejar atrás la escalada de los enfrentamientos militares”, y señala que el “caso de Granada actualiza una práctica que creíamos desterrada, y que afecta hondamente las bases del sistema interamericano”. De esa manera, denuncia la falta de operatividad de la OEA en los conflictos de la región y hace un llamado para que se reestructure.

Estas reuniones de los cuatro países de Contadora no se reflejan claramente en la prensa; aparentemente se celebran en la sede de la representación diplomática de Panamá en la capital norteamericana. En todo caso, esa actividad de coordinación e información del Grupo se recoge —de manera un tanto informal— de las discusiones en la Asamblea General de la OEA. Los cuatro cancilleres y sus homólogos centroamericanos acuerdan un calendario para las siguientes discusiones, lo que refleja su preocupación por la lentitud del proceso y su esperanza de lograr que los cinco países firmen un tratado general de paz, del cual se habla insistentemente hasta fines de noviembre.

El clima general es de tensión. Estados Unidos ha llegado a tener hasta 5 000 hombres en territorio hondureño, ya que realiza los ejercicios militares de Ahuas Taras II con el ejército de Honduras. Tanto los dirigentes sandinistas como los líderes de la coalición salvadoreña de oposición expresan reiteradamente sus temores de que Estados Unidos invada a Nicaragua o a El Salvador, no obstante que altos funcionarios del Departamento de Estado y de otros organismos gubernamentales sostienen que la inquietud es infundada. Por otra parte, se observa en la Junta de Gobierno nicaragüense cierto ánimo conciliador con la posición del gobierno de Reagan: los sandinistas piden a los líderes salvadoreños que abandonen el país y, al mismo tiempo, relajan la censura que ejercen sobre el periódico de oposición *La Prensa*, y empiezan a hablar de

una posible amnistía a los presos acusados de atentar contra la seguridad del Estado, la cual se extendería a los contrarrevolucionarios que depongan las armas. Entre tanto, en Costa Rica renuncia el canciller Fernando Volio Jiménez, bien conocido por sus inflexibles posiciones contrarias al gobierno de Nicaragua. Parecería surgir un contexto más propicio para llegar a un entendimiento entre las partes en conflicto.

*Diciembre de 1983*

Al acercarse el final del año y con lo reciente del cambio de gobierno en Venezuela, se aceleran las gestiones de los cuatro países de Contadora, a pesar de que a principios del mes se cancela una reunión de cancilleres del Grupo. Ello, sin embargo, no es obstáculo para que se celebre una reunión de los vicescancilleres de Contadora y de los países centroamericanos, con el propósito de preparar el documento final para celebrar un pacto de paz. Si bien parecía que los cancilleres no podrían reunirse antes de enero, la dinámica de los eventos los lleva a celebrar apresuradamente una reunión justo en los días anteriores a las fiestas navideñas, y a enviar un emisario a Centroamérica al término de las mismas.

Nicaragua anuncia que llegará a la reunión de cancilleres, a principios del mes, con tres propuestas respecto al documento de objetivos: una es un proyecto de convenio sobre asuntos militares; la segunda, una declaración política de los cancilleres sobre asuntos de política interna; la tercera, un plan para promover el desarrollo económico-social. Parece muy atinado el comentario del canciller nicaragüense de que sólo Nicaragua da la impresión de tener iniciativas, aunque faltó agregar que es el país más afectado por la crisis después de El Salvador. La reunión de cancilleres se pospuso, como ya se mencionó, pero la intención de celebrarla sería incluida en las discusiones del Comité Técnico.

En efecto, las discusiones en extremo herméticas de la reunión de vicescancilleres parecen haberse encaminado fundamentalmente a estudiar la forma de pasar de los puntos del documento de objetivos a la acción. A partir de aquí, se empieza a hablar con menos insistencia de lo que anteriormente los cancilleres mencionaban como "borradores de un tratado general de paz". El Comité Técnico acuerda, sobre una base pragmática y desprovista de retórica, crear tres comisiones de trabajo para imprimir agilidad y dinamismo a las negociaciones de paz: una comisión se encargará de abordar los problemas políticos, otra tendrá a su cargo los aspectos de seguridad, y una tercera tratará los aspectos económicos y sociales de la crisis regional. El Comité manifiesta también que los mecanismos de control y verificación, que se refieren básicamente a los problemas de seguridad nacional de los países, deberán estudiarse con posterioridad al logro de acuerdos sobre las cuestiones conflictivas. Todo indica que las cosas son más complicadas de lo que se pensaba.

Los días 20 y 21 se celebra una reunión de los cuatro cancilleres del Grupo Contadora, que revisa el trabajo del Comité Técnico y sienta las bases para convocar a otra reunión de cancilleres, en la que también participen los de

los países centroamericanos, para discutir el avance de las gestiones de paz o firmar los acuerdos pertinentes. En el curso de la reunión se manifiesta la certeza de que "uno de los elementos centrales para la participación de Centroamérica será asegurar el control y la revisión de armamentos. . .", y con base en los documentos preparados por el Comité Técnico los cancilleres redactan una propuesta que llaman "normas para la ejecución de los compromisos asumidos en el documento de objetivos", que cubre los aspectos antes aludidos de política interna, seguridad y asuntos económico-sociales, propuesta que será discutida ampliamente en la reunión de enero. En un viaje relámpago por el istmo el día 25, el vicescanciller panameño, José María Cabrera, entrega ese documento de normas a cada uno de los cinco gobiernos para que lo analicen antes de la siguiente reunión de Contadora, que incluye a los cancilleres centroamericanos, los días 8 y 9 de enero. Ello da una idea de la batalla contra el tiempo.

Las tensiones en el área alcanzan dimensiones tales que absorben en gran medida el tiempo de los gobiernos de los países centroamericanos y de sus vecinos. Bernardo Sepúlveda Amor y Rodrigo Lloreda Caicedo, cancilleres de México y Venezuela, manifiestan que la posibilidad de una conflagración regional estuvo muy cerca de convertirse en una realidad, al grado de que los presidentes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela se sintieron motivados a incluir en la "Declaración del Puente de Boyaca" un llamado "a la comunidad internacional que ha venido apoyando dicha gestión [la del Grupo Contadora] para que influya positivamente en la conciencia de aquellos Estados que mayor aporte pueden y deben ofrecer a la paz regional".

Desde otro punto de vista, puede verse mejoras en el escenario político en la medida que el doctor Alfonsín accede a la presidencia de Argentina y el doctor Lusinchi es elegido presidente de Venezuela. En este mes también se aprueba y pone en vigencia en El Salvador la nueva Constitución política, que es el primer paso hacia la legitimación del futuro gobierno, pues se espera convocar a elecciones para fines de marzo de 1984. La Asamblea Constituyente se reestructura y le asignan las funciones normales de un órgano legislativo en tanto se realicen elecciones para diputados y para autoridades edilicias, previstas para 1985. Hechas a un lado las simpatías y las críticas a la Asamblea Constituyente, al pacto social que elaboró y al proceso político al que da lugar, la verdad es que el gobierno y parte de la nación se mueven, dentro de las condiciones de anormalidad que imperan, cada vez más hacia un ordenamiento institucional de sus vidas; es decir, se alejan de los caprichos y volubilidades de un gobierno regido por decretos.

En suma, el año que termina estuvo lleno de dolor y pena para algunos, pobreza y pérdida de bienestar para otros, esperanzas y deseos frustrados para una gran mayoría de centroamericanos. A pesar de ello, las naciones de esta zona siguen buscando afanosamente una salida a la crisis regional, labor en la que se han visto asistidas con verdadero interés por sus vecinos (México, Panamá, Colombia y Venezuela) a través del Grupo Contadora. Es por ello que no se han cerrado los caminos de la búsqueda de una solución pacífica a la crisis.

*Enero de 1984*

Justo en los días en que se cumple un año de haberse iniciado las gestiones colectivas de Contadora en el campo de la política exterior, se celebra una reunión para aprobar las "normas de aplicación de los compromisos adquiridos en el documento de objetivos".<sup>14</sup> Este conjunto de normas ha trascendido sólo parcialmente, ya que en el texto que circula se hace alusión a varios anexos —cuando menos dos— que no se han dado a conocer. Ese conjunto de normas se divide en tres grandes grupos: uno que se refiere a cuestiones de seguridad, otro relativo a asuntos de política, y un tercero que tiene que ver con el desarrollo económico y social de los cinco países.

Las normas de los asuntos de seguridad son siete. Las primeras dos se refieren al armamento propiamente dicho: que los países "declaren todos una moratoria en la adquisición de armamento y que se establezca un registro por inventario de los armamentos existentes". Hay una norma relativa a la elaboración de un calendario para la revisión gradual de asesores militares extranjeros y otros elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad. Otra norma se refiere a la identificación y supresión de las fuerzas militares irregulares que pretenden desestabilizar a gobiernos establecidos en el área. Una quinta norma propone identificar las áreas por las que se lleva a cabo el tráfico de armas para someterlas a control gubernamental. La sexta se refiere al establecimiento de sistemas de comunicación que permitan prevenir y resolver problemas entre los Estados. La última norma sugiere crear una comisión especial de supervisión que tendrá a su cargo velar por la marcha y aplicación de las normas anteriores. Las disposiciones que regulan el funcionamiento de esa comisión integran el anexo uno, cuyo contenido no se hizo público.

El siguiente grupo de normas se refiere a los medios políticos para conseguir la paz y/o afianzarla; son ocho puntos específicos. El primero incita a promover el diálogo interno y a buscar la reconciliación nacional sobre bases de justicia, libertad y democracia. En todos los países, excepto Costa Rica, cuando menos uno de estos tres elementos siempre ha estado ausente, si no es que todos, fenómeno que probablemente determina, en combinación con la desigualdad económica-social, el surgir de la violencia. El segundo punto pide respetar los derechos humanos y dar cumplimiento a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados en esta materia. Otro asunto es el de las leyes electorales: las elecciones deben ser un proceso en el que los pueblos participen. Los dos temas siguientes se refieren a la necesidad de contar con un padrón electoral confiable y de actualizar las normas que garanticen la participación de todos los partidos políticos representativos de corrientes de opinión en los países. El punto seis propone establecer un calendario electoral a fin de asegurar que los partidos participen en pie de igualdad. El penúltimo asunto es el

<sup>14</sup> En aras de la brevedad, las llamaremos "normas de aplicación" de ahora en adelante.

de los programas de ayuda a los refugiados, que es necesario intensificar en coordinación con los organismos internacionales competentes. El último punto aborda el problema de las recriminaciones y acusaciones entre Estados; hace un llamado para ponerles fin y permitir así un clima más propicio a la distensión.

El último subconjunto de normas, como ya mencionamos, se refiere a la cooperación entre los Estados en materia de desarrollo económico y social. En un primer punto, sanciona la labor del Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), creado dentro del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Otro asunto es la búsqueda conjunta de recursos para salvar y fortalecer los órganos de integración de la región y, al mismo tiempo, promover el comercio intrazonal. El siguiente punto se refiere a promover el acceso de los productos centroamericanos a los mercados internacionales. (A decir verdad, esta cuestión es algo obscura.) El cuarto es el impulso a "proyectos de integración conjunta"; probablemente se haya pensado en interconectar los sistemas eléctricos de todos los países, desde Colombia hasta México, proyecto sugerido en algún momento por Miguel de la Madrid a Belisario Betancur al inaugurar éste una presa hidroeléctrica en Colombia. El último asunto que se aborda es la conveniencia de adoptar estructuras económicas y sociales justas, que le den una base material a los proyectos políticos democráticos y que proyecten a los individuos hacia adelante en todos los órdenes: económico, cultural y social.

Para darle vida a todo este conjunto de "normas", se crean tres comisiones de trabajo que preparen proyectos o acuerdos y mecanismos de acción en los campos mencionados; este es el objeto de un anexo dos, cuyo contenido específico se desconoce.

El problema salvadoreño, que sigue siendo parte medular de la crisis, se aborda de una manera indirecta en las normas sobre asuntos políticos, pero no es mucho lo que los países de Contadora pueden hacer directamente, a menos de que el gobierno salvadoreño solicite sus buenos oficios y la coalición FDR-FMLN haga otro tanto. Hasta la fecha, los cancilleres del Grupo Contadora no han tenido contacto con esa coalición opositora, ya que de hacerlo motivarían serias objeciones del gobierno salvadoreño. Lo mismo ocurre con los grupos antisandinistas. Ello no impide contactos individuales: el FDR-FMLN tiene representantes en los cuatro países y se sabe que facciones de ARDE acceden a altas esferas en tres de ellos. La sutileza de acción habilita al Grupo Contadora para mediar entre las partes en conflicto cuando así lo pidan todas.

Otro problema no resuelto por el Grupo Contadora es el de los grandes ausentes: Estados Unidos y Cuba. México, en 1981, intentó acercar a estos dos países para que iniciaran un diálogo, y logró que el Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, celebrara en México una entrevista con el vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. Pero estas gestiones que en su inicio parecieron prometedoras fracasaron en abril de 1982. El Grupo Contadora tiene que abocarse a estudiar la forma de incluir a estos dos países en sus gestiones para que cualesquiera tratados de paz o de distensión que pue-

dan surgir en su seno tengan alguna viabilidad. Por otra parte, la inclusión de esos dos países le daría al proceso un ritmo y una perspectiva diferentes.

Al hacer el balance de lo alcanzado por el Grupo Contadora al cumplir un año de existencia, vemos que los tratados de paz de los que se habló en un principio no se han firmado aún, no obstante que en varias oportunidades se mencionó tener ya los borradores. Ello, en alguna medida, puede obedecer al hecho de que las potencias medias o emergentes que participan en el Grupo se niegan a actuar como tales por razones de tradición o de principios que no corresponden ya a su actual posición económica. Por otra parte, es conveniente recordar que el Grupo desea promover el progreso de ideas emanadas de los países centroamericanos o, en todo caso, someter a su consideración ideas concebidas por el Grupo, que los centroamericanos discutan y adapten a su conveniencia.

La lentitud del proceso de negociación ha sido muy difícil de superar, lo cual da razones para pensar que en el fondo no hay un interés real de los países centroamericanos por encontrar una solución política y pacífica a la crisis. Ello podría ser resultado de que algún participante esté convencido de tener posibilidad y capacidad de darle una solución militar; basta con que uno de los participantes disienta para que se prolongue el proceso. Otra posibilidad es que algún país se beneficie con la lentitud. También es parte de la explicación la interferencia de intereses extraños a Centroamérica, que desempeñan un papel importante.

Es poco lo que en materia económica pueden hacer los países en las circunstancias actuales. Para conseguir los objetivos económicos, debe haber paz social en cada uno de los cinco países y entre ellos. El pronunciamiento sobre Centroamérica de la Conferencia Económica Latinoamericana, promovida por el SELA y celebrada en Quito, no tiene ningún sentido si la región no alcanza primero algún acuerdo mínimo de paz. La declaración que surge de dicha conferencia a mediados de enero, contiene un punto específico sobre América Central dividido en dos partes: una expresa la necesidad de encontrarle una salida negociada a los problemas de Centroamérica, y en virtud de ello manifiesta apoyo al Grupo Contadora; la segunda se refiere al Comité de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), y respalda a ese mecanismo creado por el SELA para atender la parte económica de los problemas de los pueblos centroamericanos. En tanto no se resuelva la crisis social y política de América Central, los esfuerzos que se desplieguen para superar los problemas económicos van a significar solamente un mayor desperdicio de recursos. Además, los esfuerzos que hacen actualmente los países en el terreno de la economía, están demasiado influidos y condicionados por razones de seguridad interna y externa como para atender realmente las necesidades de los pueblos.

La violencia, pues, es ya parte del panorama cotidiano al que han tenido que adaptarse los habitantes. Ello hace más probable que los conflictos locales se extiendan y amenacen la paz de los países vecinos. Consecuentemente, el Grupo Contadora busca afanosamente la salida negociada. Cabe añadir que los países hemisféricos más alejados de Centroamérica encuentran en ese Gru-

po la manera fácil de eludir una responsabilidad; según el canciller colombiano, “para muchos países eso es lo cómodo frente a un conflicto en que se encuentran comprometidas las grandes potencias”.<sup>15</sup> El apoyo real que tiene el Grupo Contadora no es muy grande y sus miembros lo saben.

<sup>15</sup> “Ni enemiga ni incondicional de Washington, AL: Lloreda C.”, segunda parte de una entrevista al canciller de Colombia llevada a cabo por Carlos Velasco Molina, *Excelsior*, 14 de marzo de 1984, p. 21.